

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL
Acta N° 202

Medellín, veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso de apelación en el proceso ordinario promovido por el señor **HÉCTOR DE JESÚS ORTIZ ÁLVAREZ** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

Auto. Reconocimiento de personería

En los términos del poder conferido por la doctora ELIANA MORENO PEDROZA, obrando en calidad de representante legal para procesos de COLPENSIONES de la firma MUÑOZ Y ESCRUCERIA S.A.S., de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso, el despacho le reconoce personería suficiente para actuar a la doctora CLAUDIA MILENA GUARÍN GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía 1.038.413.681, y portadora de la tarjeta profesional 306.473 del Consejo Superior de la Judicatura, para que continúe la representación judicial de COLPENSIONES.

ANTECEDENTES

Pretensiones

El actor solicita se condene a **Colpensiones** a reconocer y pagar la pensión de vejez sobre las 1.059,⁵⁷ semanas cotizadas desde el 25 de mayo de 2004 y en adelante de forma vitalicia junto con las mesadas adicionales, con el correspondiente pago del retroactivo, así como las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada anualidad que se hayan causado y se sigan causando, intereses moratorios desde el 25 de febrero de 2005, indexación, costas y agencias en derecho

Hechos

Como fundamento de sus pretensiones manifiesta que nació **el 21 de abril de 1944** y realizó cotizaciones al ISS, hoy Colpensiones desde el año 1968.

Es beneficiario del régimen de transición, y el **25 de mayo de 2004** elevó solicitud formal ante el ISS, reclamando el reconocimiento y pago de la pensión de vejez; no obstante, la entidad por medio de la **Resolución 013819 de junio de 2007**, infundadamente concedió una indemnización sustitutiva.

El **24 de mayo de 2013** elevó solicitud a Colpensiones, solicitando el reconocimiento de la pensión de vejez, sin embargo, mediante **Resolución GNR 25832 de octubre de 2013**, la entidad manifiesta que únicamente acredita 553 semanas, argumento que se encuentra infundado considerando la certificación emitida por el ISS que acredita un total de 1.086 semanas debidamente cotizadas.

Al no tener una fuente de ingresos, solicitó indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en la cual se tuviera en cuenta la totalidad de semanas que había cotizado, solicitud que fue resuelta mediante Resolución **GNR 337531 de noviembre de 2016**.

El **12 de julio de 2017** radicó petición ante la accionada, solicitando información de los números patronales 8389031, 830095979, 811021080, 3464628 y el expediente administrativo, empero, las solicitudes fueron resueltas de forma displicente.

El **18 de junio de 2018** elevó nuevamente solicitud ante Colpensiones, para que se reconociera a su favor la pensión de vejez, a lo cual la entidad a través

de la **Resolución SUB 184771 de julio de 2018**, niega la prestación argumentando que no logra acreditar el mínimo de 1.300 semanas, además que la prestación solicitada es incompatible con la indemnización sustitutiva.

Contestación Colpensiones

La AFP demandada a través de apoderada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al señalar que el demandante en la actualidad solo cuenta con 544 semanas en toda su vida laboral, y que la entidad nunca lo indujo en error cuando se le negó la prestación, toda vez que no cuenta ni con las 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, ni tampoco con 1000 semanas, no siendo beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir, buena fe, prescripción, inexistencia de la obligación de reconocer intereses moratorios, compensación, la innominada o genérica e imposibilidad de condena en costas

Sentencia de primera instancia

El Juez Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **10 de marzo de 2021**, **ABSOLVIÓ** a Colpensiones de todas las pretensiones incoadas en su contra, al considerar que el demandante no acreditó la densidad mínima de semanas exigidas por la ley. Las costas procesales se impusieron a cargo del actor.

Apelación

La decisión anterior fue objeto de apelación por la apoderada del demandante, indicando que, se logró probar que el actor contaba con más de 1000 semanas cotizadas, y si bien existen inconsistencias en las historias laborales, también existe un certificado emitido y allegado por la misma entidad sin aportar información diferente a la que ya se encontraba en el proceso. Finalmente indica que, si bien el certificado es de 2009, podría restarse las semanas posteriores al año 2004 que fue el momento en el que señor Ortiz realizó la solicitud, y cumpliría con las semanas exigidas en ese momento para acceder al derecho pensional.

Alegatos de conclusión

Colpensiones: Solicita la confirmación de la sentencia al advertir que la prestación se encuentra bien liquidada.

CONSIDERACIONES:

Problema Jurídico

El problema jurídico para resolver en esta instancia, atendiendo a la apelación formulada, será: (i) establecer si el señor **Héctor de Jesús Ortiz Álvarez** causó el derecho a la pensión de vejez al acreditar **1.059 semanas cotizadas** a partir del 25 de mayo de 2004; (ii) Determinar si se le indujo en error mediante resolución 003219 del 25 de febrero de 2005 del ISS, provocando que continuara realizando cotizaciones hasta el año 2013; y, (iii) procedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 e indexación.

Pruebas relevantes

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente:

1. La copia de la cédula de ciudadanía del actor da cuenta que este nació **el 21 de abril de 1944**, arribando como consecuencia a los 60 años de edad el mismo día y mes de 2004 (04/ Pág. 244)
2. Del contenido de la resolución SUB 184771 del 11 de julio de 2018 (04/Pág. 196), proferida por Colpensiones, por la cual se niega el reconocimiento de la pensión de vejez, se lee el recuento de actos administrativos que han resuelto acerca de la solicitud de pensión e indemnización sustitutiva de pensión de vejez del demandante, así:

*“Que mediante Resolución No. 003219 del 25 de febrero de 2005 el Instituto de Seguros Sociales reconoció una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a favor del señor **ORTIZ ALVAREZ HECTOR DE JESUS**, identificado con CC No. 3.464.628, en cuantía única de \$1.761.495, liquidada con base en 492 semanas.*

*Que mediante Resolución No. 13440 del 20 de junio de 2006 el Instituto de Seguros Sociales dejó sin efectos la Resolución No. 003219 del 25 de febrero de 2005 y negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez solicitada por el señor **ORTIZ ALVAREZ HECTOR DE JESUS**, ya identificado.*

*Que mediante Resolución No. 28172 del 28 de noviembre de 2006 el Instituto de Seguros Sociales dejó sin efectos la Resolución No. 003219 del 25 de febrero de 2005 y negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez solicitada por el señor **ORTIZ ALVAREZ HECTOR DE JESUS**, ya identificado.*

*Que mediante Resolución No. 013819 del 28 de junio de 2007 el Instituto de Seguros Sociales reconoció una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a favor del señor **ORTIZ ALVAREZ HECTOR DE JESUS**, ya identificado, en cuantía única de \$2.051.558, liquidada con base en 492 semanas.*

*Que mediante Resolución GNR 258532 del 15 de octubre de 2013 Colpensiones negó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez al señor **ORTIZ ALVAREZ HECTOR DE JESUS**, ya identificado, por no acreditar los requisitos mínimos establecidos en la Ley 797 de 2003.*

*Que mediante Resolución GNR 294643 del 22 de agosto de 2014 esta entidad negó nuevamente el reconocimiento y pago de una pensión de vejez al señor **ORTIZ ALVAREZ HECTOR DE JESUS**, ya identificado, por no acreditar los requisitos mínimos establecidos en la Ley 797 de 2003.*

*Que mediante Resolución GNR 337531 del 16 de noviembre de 2016 esta entidad reliquidó una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a favor del señor **ORTIZ ALVAREZ HECTOR DE JESUS**, ya identificado, en cuantía única de \$2.563.873, liquidada con base en 492 semanas.”*

3. La vicepresidencia de pensiones del Seguro Social certificó el 3 de abril de 2009, “*Que según archivos de pensiones se encontró que el señor **HECTOR DE JESÚS ORTIZ ALVAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 3.464.628, laboró en las empresas cuyos números de Nit son 8.389.031 – 830095979 – 811021080 – 3464628, respectivamente y el total de las semanas reportadas son de 1086” (01/ Pág. 33)*
4. Múltiples historias laborales reposan en el expediente; sin embargo, la actualizada al 29 de octubre de 2018 es la que cuenta con más semanas de cotización reportadas, esto es, **544.71** (03/Pág. 1)

Requisitos para causar el derecho a la pensión de vejez

Para resolver el problema planteado, se debe partir de que la ley 100 de 1993 en su artículo 36, consagró el régimen de transición pensional, como una protección a aquellas personas que, a juicio del legislador, estaban próximas a

cumplir los requisitos para acceder a su pensión; para este grupo poblacional dispuso que se respetarían las condiciones de edad, semanas cotizadas y monto consagradas en el régimen anterior. Esta prerrogativa consagra en dicho artículo como requisitos, que al momento de entrar en vigencia el sistema cuenten con 40 o más años de edad, en el caso de hombres, o 15 o más años de servicios.

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que en principio el actor ostenta la calidad de beneficiario del régimen de transición, atendiendo a que para el 1º de abril de 1994, contaba con 40 años de edad.

Ahora, el decreto 758 de 1990 consagra que el derecho a la pensión de vejez se causa una vez el afiliado, en este caso hombre, cumpla 60 o más años de edad y cuente con un mínimo de 500 semanas cotizadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, o que acredite un número de 1.000 semanas de cotización en cualquier tiempo.

Aspira el demandante se le reconozca la pensión de vejez, en atención que para el momento en que arribó a los 60 años de edad en 2004 contaba con más de 1000 semanas de cotización, según certificación expedida por el ISS, además de ser beneficiario del régimen de transición; de otra parte, en múltiples ocasiones el otrora Instituto de Seguros Sociales y Colpensiones resolvieron las solicitudes de pensión de vejez e indemnización sustitutiva, siendo negada la primera de estas, al considerarse que el afiliado no cuenta con la densidad mínima de semanas exigidas por la ley; finalmente, el juzgado del conocimiento negó las súplicas de la demanda, advirtiéndole que no se causó el derecho a la prestación, al no acreditarse las cotizaciones necesarias.

Insiste la parte activa que, la densidad de semanas reportadas en el certificado emitido por la vicepresidencia de pensiones del Seguro Social del 3 de abril de 2009 deben ser tenidos en cuenta para efectos de contabilizar las semanas exigidas. Como apoyo de su solicitud, se emparó en las sentencias SL14426 de 2014, 34393 de 2010 y 38366 de 2013, donde la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia le dio valor probatorio a las certificaciones laborales.

Se hace necesario entonces advertir que el documento que pretende hacer valor el demandante no es un certificado laboral. Este obedece a una certificación de semanas cotizadas, en la que no se hace relación alguna a cuáles fueron los períodos laborados y por cuál empleador, así como a los IBC reportados.

Con relación a la relevancia de la historia laboral como prueba definitiva para demostrar la densidad de períodos cotizados por los afiliados, la Corte Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse, indicando que en este documento se reportan datos claves y necesarios para el reconocimiento de la prestación. En sentencia T-101 de 2020, indicó:

“De acuerdo con lo anterior, la pensión de vejez busca retribuir el esfuerzo hecho por el afiliado en realizar cotizaciones al sistema durante su vida laboral, por lo tanto, su historia laboral y los documentos que soportan dichos aportes se convierten en piezas clave dentro de todo el proceso de reconocimiento y pago de dicha prestación. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional ha analizado la importante responsabilidad que tienen las administradoras de pensiones respecto de la información que reposa en la historia laboral de sus afiliados y qué derechos fundamentales resultan vulnerados cuando los datos que reporta son confusos, inexactos o incompletos. “Tal responsabilidad tiene que ver, tanto con la función que cumple la historia laboral en el marco de un sistema pensional de naturaleza contributiva como con el carácter personal de los datos que contiene”.

*3.3. En cuanto a la función de la historia laboral, se recuerda que el sistema pensional de nuestro país requiere que para acceder a un derecho pensional se acredite un número de cotizaciones específico que figura en la historia laboral del afiliado que, además, indica tanto el monto, la relación contractual de la que se deriva, así como el periodo en el cual se hicieron dichos aportes. **De esta manera, la historia laboral “opera como un elemento de prueba definitivo que, a la vez que facilita el acceso del trabajador y de la entidad que administra sus aportes a la información clara, actual y completa sobre el estado de cumplimiento de los requisitos en virtud de los cuales el primero podría llegar a adquirir el estatus de pensionado, propicia el oportuno reconocimiento de la prestación económica y la salvaguarda efectiva de los derechos fundamentales que se protegen a través del mismo”.***

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha advertido que adicional al valor probatorio que tiene la historia laboral respecto de los deberes de las administradoras frente al reconocimiento y pago de pensiones, está la naturaleza de la información que allí se consigna la cual, como ya se mencionó, incluye datos de identificación del afiliado, el monto de sus ingresos, su actividad. Es decir, datos sujetos a la legislación actual de tratamiento de bases de datos y archivos que incluyen información de este tipo.

3.4. Además de la responsabilidad de manejo de información que surge para las administradoras de fondos de pensiones, está aquella dirigida a la custodia, conservación y guarda de la información necesaria para, en el momento requerido, determinar si su afiliado cumple o no con los requisitos para acceder a una pensión, incluyendo los documentos físicos o magnéticos que soportan dicha información, de tal manera que la garantía del derecho pensional de una persona no puede verse comprometida por la presencia de inconsistencias en su historia laboral, atribuibles a problemas operativos o administrativos en el manejo de esos documentos .

3.5. Más allá de la simple guarda o custodia de los documentos que soportan la historia laboral de sus afiliados, las administradoras de fondos de pensiones tienen el deber de organizar y sistematizar esos datos, por lo que esta Corporación ha concluido que “no es posible trasladarle a los afiliados las consecuencias negativas a

los defectos que puedan derivarse de la infracción de ese deber. En ese sentido, los efectos de los errores operacionales en la administración de las historias laborales deben ser, por el contrario, asumidos por la entidad administradora, que cuenta con los medios y la infraestructura para gestionar los datos de las cotizaciones y sus soportes, para evitar su pérdida o deterioro e impedir que el afiliado sufra los efectos negativos que puedan derivarse de cualquiera de esas circunstancias”.

En ese sentido, del valor probatorio que ostenta la historia laboral del afiliado surge para las administradoras de pensiones la responsabilidad de asegurar que su contenido sea fiable, es decir, que refleje la realidad laboral de un trabajador pues se trata de su esfuerzo económico por años dirigido a lograr una prestación pensional. Lo anterior permite concluir que es necesario que la información que se encuentra en la historia laboral de un afiliado “sea cierta, precisa, fidedigna y actualizada. Tal es el sentido del principio de veracidad o calidad intrínseco al tratamiento de los datos a cuyo cargo se encuentran la administradora del régimen pensional de prima media y los fondos privados de pensiones”. (Negrilla fuera del texto original)

De lo anterior se desprende que, no es suficiente con que la parte actora allegue una certificación emitida por el ISS que haga alusión a que se cotizaron 1086 semanas; en realidad, los períodos cotizados deben ser acreditados a través de prueba idónea, como es el caso de la historia laboral o en su defecto, certificaciones laborales de empleadores donde se demuestre que el afiliado efectivamente laboró los periodos certificados.

De acuerdo con las reglas de la sana crítica, la libre formación del convencimiento y la valoración probatoria de que trata el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el operador judicial tiene la facultad de libre apreciación y ponderación probatoria y con base en ello, inclinarse por los medios demostrativos que le merecen mayor persuasión o credibilidad, que le permiten hallar la verdad real, siempre y cuando las inferencias sean lógicas y razonables. (Ver sentencias CSJ SL2049-2018, SL1469-2021 y SL2262-2022)

En el presente asunto, la historia laboral da cuenta que el señor Héctor de Jesús Ortiz Álvarez acreditó en toda su vida laboral **544.71**, de las cuales 423 semanas corresponden hasta 2004, lo que permite concluir que no acreditó las semanas mínimas exigidas por el decreto 758 de 1990 y que no se le indujo en error para seguir realizando aportes a pensión.

No obra en el expediente alguna otra prueba documental en el que se soporte que efectivamente el actor cotizó los períodos a los que se hace alusión en la certificación; en este caso sucede lo contrario, al hallarse prueba que demuestra una densidad mucho mas baja de cotizaciones.

Con fundamento en lo regulado en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, donde el operador judicial tiene la facultad de libre apreciación y ponderación probatoria y con base en ello, inclinarse por los medios demostrativos que le merecen mayor persuasión o credibilidad, que le permiten hallar la verdad real, siempre y cuando las inferencias sean lógicas y razonables, esta Sala es del convencimiento que las semanas reportadas en la certificación no reflejan la realidad laboral del demandante, situación que se logra con la copia de las múltiples historias laborales que reposan en el expediente.

En los términos señalados, se hace innecesario que por esta Sala se haga pronunciamiento acerca de los demás problemas planteados, y en tal sentido se **CONFIRMARÁ** la sentencia absolutoria.

Costas

Las costas procesales de la primera instancia quedan como lo dijo el juez del conocimiento. Las de la segunda instancia, atendiendo a lo establecido en el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso y por no salir adelante la apelación formulada por el demandante, son de su cargo y en favor de la demandada. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de \$290.000.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia de primera instancia dictada por el Juez Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín el **10 de marzo de 2021**, en el proceso ordinario adelantado por **HÉCTOR DE JESÚS ORTIZ ÁLVAREZ** contra **COLPENSIONES**.

Radicado: 05001-31-05-019-2018-00582-01
Radicado Interno: P05523
Asunto: Confirma sentencia

SEGUNDO: Las costas procesales y agencias en derecho quedan como se dijo en la motivación de esta providencia.

La anterior decisión se notifica por **EDICTO**.

LOS MAGISTRADOS


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA


HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ


ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ